

■ **“Amenazaban la seguridad pública en cientos de vecindarios y comunidades”**

Detienen en Estados Unidos a 2 mil 179 indocumentados “criminales”

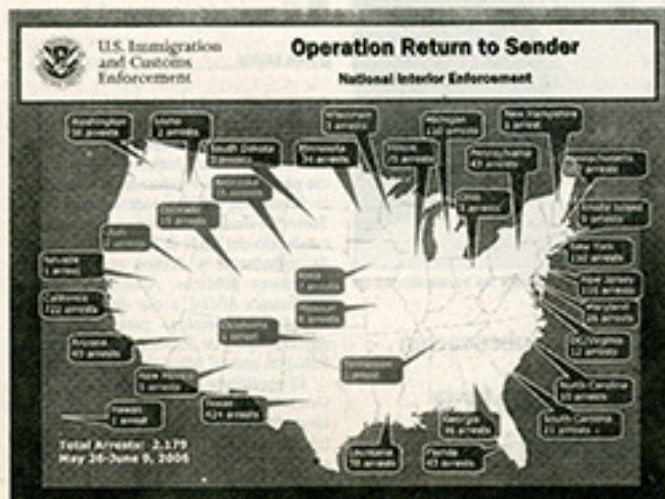
WASHINGTON, 14 DE JUNIO. Las autoridades estadounidenses arrestaron en las dos semanas y media recientes a 2 mil 179 extranjeros por ser indocumentados, fugitivos, miembros de pandillas o criminales buscados, en un operativo llamado *Devolución al Origen*, informó hoy el gobierno.

Las 2 mil 179 personas, entre ellas muchos indocumentados que no habían violado otra ley que la migratoria, están ahora aguardando su deportación.

“La operación *Devolución al Origen* es otro ejemplo de una nueva y dura estrategia de aplicación de las leyes, que busca encontrar y deportar a todos los extranjeros criminales, aumentar la aplicación de las leyes en los lugares de trabajo (para detectar indocumentados) y atacar con dureza la infraestructura criminal que perpetúa la inmigración ilegal”, señaló el secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff.

“Los fugitivos que fueron capturados en esta operación amenazaban la seguridad pública en cientos de vecindarios y comunidades en todo el país. Este departamento no tiene tolerancia ante su comportamiento criminal, y estamos usando toda la autoridad de la que disponemos para concentrar la atención en operativos contra fugitivos y liberar a las comunidades de este crimen”, agregó Chertoff.

Entre los 2 mil 179 detenidos bajo este operativo, aproximadamente la mitad tienen historiales criminales que van desde ataques sexuales a menores hasta secuestro y asalto con arma mortal. Por ejemplo, 145 de los arrestados fueron sentenciados por



delitos sexuales, cuyas víctimas fueron menores de edad.

Además, 367 extranjeros fueron arrestados por ser miembros o estar asociados a pandillas callejeras como la *Mara Salvatrucha* (MS-13). Uno de ellos es Samuel Gil Martínez, un miembro de MS-13 que había sido sentenciado antes a la cárcel en Boston por asalto y golpes: una vez usó un bat de béisbol y otra vez atacó

a una persona en una parada de autobús con una pesada herramienta de metal. Otros 640 eran indocumentados que habían sido citados por la justicia para presentarse ante una corte de inmigración para ser deportados, y decidieron no acudir a la cita, con lo cual se habían transformado en fugitivos.

a una persona en una parada de autobús con una pesada herramienta de metal.

Otros 640 eran indocumentados que habían sido citados por la justicia para presentarse ante una corte de inmigración para ser deportados, y decidieron no acudir a la cita, con lo cual se habían transformado en fugitivos.

El comienzo

El operativo empezó el 26 de mayo y terminó este martes, informó la secretaria asistente para Control de Inmigración y Aduanas, Julie Myers.

“La bienvenida de Estados Unidos no se extiende a inmigrantes que vienen aquí a cometer crímenes. No dejaremos ningún rincón sin revisar en la tarea de perseguir y deportar a los extranjeros que victimizan a nuestras comunidades”, indicó Myers.

La mayoría de los arrestados fueron acusados de violar las leyes de inmigración y están ahora en el proceso de deportación. Una porción de los arrestados, 829 personas, ya habían sido repatriados antes.

Los arrestados en esta operación vinieron de decenas de países, incluidos Angola, Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, China, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Irak, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Kenia, Liberia, Libia, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Senegal, Tailandia, Uganda, Reino Unido y Uzbekistán.

Algunos de los arrestados con amplios historiales criminales son mexicanos, como José García Ríos, Wilber Kuk y Angel Lira Alvarez. García fue sentenciado por robo agravado, narcotráfico y amenazas terroristas; Kuk fue sentenciado por secuestro, robo, uso de arma de fuego y heridas graves, y Lira Alvarez es miembro de una pandilla de Texas y fue sentenciado por robo y tráfico de drogas.

■ **LEOPOLDO RAMOS Y CRISTÓBAL GARCÍA BERNAL**
CORRESPONDIALES

MONCLOVA, CHIAP., 14 DE JUNIO. Por segundo día consecutivo, trabajadores de la siderúrgica Altos Hornos de México se disputaron a golpes y palos la dirección de la sección 288 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. La jornada de violencia de hoy dejó al menos 15 obreros lesionados y provocó el desalojo de al menos 800 estudiantes de dos escuelas vecinas del edificio donde comenzó la reyerta.

El enfrentamiento se originó a las cuatro de la tarde, cuando aproximadamente 400 trabajadores que simpatizan con Elías Morales Hernández, legitimado como dirigente nacional del sindicato por el gobierno federal, irrumpieron en las oficinas de la sección 288, las cuales eran resguardadas por 200 partidarios de Napoleón Gómez Urrutia, el depuesto líder minero que se encuentra prófugo.

Los activistas de Morales Hernández iban armados con piedras y palos, que utilizaron para echar por la fuerza a sus adversarios. Entre los lesionados se encuentra Roberto Hernández Terrazas, representante de Gómez Urrutia en Monclova, quien fue apedreado al igual que Alfredo Gaytán y Mario Pérez Reboloso, otros dos simpatizantes del depuesto dirigente sindical.

El enfrentamiento, que se inició en el recinto sindical, se extendió a varias cuerdas en el centro de este municipio, debido a que el grupo mayoritario no sólo corrió de las instalaciones a sus contrarios, sino que además los persiguieron con piedras, palos y petardos.

Una vez que se apoderaron del edificio, los activistas de Morales Hernández incendiaron las fotografías de Napoleón Gómez Urrutia que adornaban las paredes.

Si bien el momento más intenso de la trifulca se dio hacia las 15 horas, durante la noche ocurrieron manifestaciones

■ **Autoridades locales responsabilizan al gobierno federal**

A golpes y palos se disputan la directiva minera en Monclova

de violencia intermitentes entre ambas partes.

La Policía Preventiva municipal sólo permaneció a la expectativa y uso de los agentes dijo que no podían intervenir, pues los rjosos los superaban en número, ya que en Monclova solamente existen 120 policías.

Por la noche, el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, responsabilizó a la Federación de la violencia en Monclova, pues el gobierno de Vicente Fox no ha intervenido en este conflicto, dijo, no obstante que desde abril se le percibió de los riesgos de enfrentamientos de este tipo.

“Tal parece que el gobierno federal está esperando que haya muertos para poder intervenir en un asunto que es de su responsabilidad. Aseguramos que el principal factor de desestabilización en Monclova se llama gobierno federal”, comentó Pimentel González.

En Sonora, el gobernador Eduardo Bours Castelo anunció que actuará a partir de hoy, “si es necesario 24 horas diarias durante los siete días de la semana”, como mediador en el conflicto que mantiene paralizadas a tres instalaciones mineras de la entidad, que son propiedad del Grupo México.

Luego de 81 días de huelga en la mina La Caridad y la planta de cal de Agua Prieta, así como 14 días del paro de actividades en Mexicana de Cananea, el mandatario sostuvo que “existe la mejor disposición de la empresa” de atender el canal de comunicación que abrió la administración estatal.

De su lado, el jefe de Comunicaciones

de Mexicana de Cananea, Benjamín Bolaños Becerra, informó que los trabajadores de la sección 65 del sindicato —en paro desde el pasado primero de junio—, tomaron este miércoles las instalaciones de la empresa y colocaron banderas rojinegras.

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

MINARIO / TALLER
PERSONAS: PROTECCIÓN,
DE JUSTICIA Y PREVENCIÓN

14 Y 15 DE JUNIO DE 2006



Durante la inauguración del seminario taller *Trata de personas: protección, procuración de justicia y prevención*, en Tapachula, Chiapas, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, manifestó que a pesar de los avances en materia de derechos humanos, ese fenómeno mundial es una realidad que ha sido insuficientemente atendida, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional, a pesar de que lacera la convivencia social y socava la existencia de cientos de miles de personas en el mundo. En la foto, con el secretario de Gobierno de Chiapas, Roger Grajales, y Yesmín Lima Adam, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado.